

## NUMERO 36

# 36.<sup>a</sup> reunión — 25.<sup>a</sup> sesión ordinaria — Agosto 27 de 1921

Presidencia de los señores D. BENITO VILLANUEVA y D. LUIS GARCIA

Senadores presentes: Aybar Augier Alberto, Esteves Manuel L., Gallo Vicente C., García Luis, Garro Pedro A., González Joaquín V., Iturbe Octavio, Larús Pedro, Linares Luis, Llanos Pedro, Luna David, Melo Leopoldo, Patrón Costas Robustiano, Saguier Fernando, Soto Pedro Numa, Torino Martín M., Villanueva Benito, Zabala Carlos.

Senadores ausentes: Con aviso: Albarracín Martín, Caballero Ricardo, Castañeda Vega Francisco, Iturraspe Ignacio de, Roca Julio A., Vidal Juan R.

### SUMARIO

#### 1. Asuntos entrados.

#### 2. Reformas al Código Penal.

—En Buenos Aires, a 27 de agosto de 1921, siendo la hora 16 y 40, dice el

**Sr. Presidente (Villanueva).** — Queda abierta la sesión con asistencia de 18 señores senadores.

Se va a dar lectura del acta de la sesión anterior.

—Se lee y aprueba sin observación.

**Sr. Presidente (Villanueva).** — Se va a dar cuenta de los asuntos entrados.

—Se lee.

### 1

#### ASUNTOS ENTRADOS

##### Peticiones Particulares.

La Liga Patriótica Argentina solicita se preste protección a la Oficina Meteorológica Argentina de la isla Laurie de las Orcadas del Sud.

—A la Comisión de Peticiones.

La Asociación Pío X y la Biblioteca "Juan Bautista Alberdi", solicitan subsidios.

—A la Comisión de Peticiones.

La Tercera Conferencia Nacional de Profilaxis Antituberculosa invita al H. Senado a adherirse a dicha Conferencia.

—A la de Legislación.

El Tiro Federal Argentino de San Carlos (Provincia de Santa Fe), solicita un premio.

—A la de Peticiones.

Antonio Czar, empleado ferroviario jubilado, solicita permiso para ausentarse del país.

—A la de Negocios Constitucionales.

Varios comerciantes importadores de carbón solicitan la derogación de la ley número 9482, prohibitiva de la exportación del carbón.

—A la de Legislación.

##### Solicitan pensión militar:

Luisa Iturbe, Teresa Iturbe y Justina Iturbe; Justa Acola de Garrido y Lorenza Bravo de González.

—A la de Guerra.

##### Solicitan pensión civil:

Laura M. Elisa V. y Polonia Esther Moreno; Isaac de la Fuente de Martínez.

—A la de Peticiones.

**Invitación.**

La Confederación Nacional de Beneficencia (Círculo de Damas Catamarqueñas), invita al H. Senado al solemne Tedéum que se oficiará con motivo del centenario de la autonomía de Catamarca.

**Sr. Presidente (Villanueva).** — Quedan invitados los señores senadores.

**Despachos de Comisión.**

La Comisión de Negocios Constitucionales ha formulado despacho en el proyecto de ley sobre triangulación del Rfo Uruguay.

—A la Orden del Día.

La de Peticiones y Poderes, en mayoría y minoría, en los diplomas presentados por los señores Segundo B. Gallo, Fernando Soria, Alejandro Ruzo y Enrique Ocampo, que los acreditan senadores por la provincia de Catamarca.

—A la Orden del Día.

**2****REFORMA AL CODIGO PENAL**

**Sr. Presidente (Villanueva).**—Se va a pasar a la orden del día núm. 13, referente al Código Penal.

Está en discusión en particular el art. 1.º

—Se lee:

Artículo 1º. — En el inciso 1º: agregar después de "la Nación Argentina" las palabras "o en los lugares sometidos a su jurisdicción". El resto del artículo no se modifica. El inciso 1º. queda como sigue: "Por delitos cometidos o cuyos efectos deban producirse en el territorio de la Nación Argentina o en los lugares sometidos a su jurisdicción".

**Sr. González.** — Pido la palabra.

Se sabe que la Cámara ha aprobado en general el proyecto de Código Penal, y que debemos entrar a considerarlo en particular.

Debo recordar que, por iniciativa suya, se resolvió reconsiderar en el seno de la comisión el proyecto sancionado, con el objeto, de incorporar a ese código todas aquellas observaciones atendibles que han llegado a su seno por diversos conductos con el objeto de presentar una planilla de modificaciones que la comisión pudiera aceptar.

En este sentido creo tener derecho, como presidente de la comisión, y miembro de ella, encargado de explicar estas cosas a la Cámara, de decir algunas palabras preliminares a la

discusión en particular, sin que esto importe, en realidad, reabrir la discusión en general del proyecto. No me voy a referir tampoco a la totalidad del proyecto, sino a la forma como la comisión ha cumplido el encargo que el Senado le hiciera de tomar en cuenta las diversas indicaciones sustentadas.

Si éste es el sentido, y éste es el pensamiento de la Cámara, continuaré en el uso de la palabra por breves momentos, y sino la Cámara me lo significará, y, en ese caso, correspondería entrar a tratar el artículo primero que está en discusión.

**Sr. Melo.**—Creo que sería muy interesante escuchar al señor senador en la breve exposición que piensa hacer explicando las razones de las enmiendas del despacho.

**Sr. González.**—Si es así, no tengo inconveniente.

**Sr. Melo.**—Parece que hay asentimiento general.

**Sr. González.**—Quiere decir, entonces, que tengo permiso de la H. Cámara para ocuparme de este asunto en la forma que he indicado.

El despacho de la Comisión de Códigos, que figura a la orden día, fué motivo de un estudio muy detenido de su parte, y encargó de la redacción del informe y de su representación en el debate que pudiera ocurrir, al señor Senador por la Capital, doctor Del Valle Iberlucea, quien ha hecho, en cumplimiento de ese mandato, un estudio digno del mayor elogio y que la comisión aceptó en términos generales, haciendo suyos el pensamiento y las observaciones por él formuladas, después de leídas con todo detenimiento.

La comisión debe entender que todos los señores senadores han leído dicho informe; es inútil, pues, volver sobre puntos de detalle, que han sido motivo de observaciones por parte de algunas personas competentes, que han hecho llegar su pensamiento a la Comisión y a las cuales ésta ha consultado, como es público.

La Comisión ha celebrado varias reuniones de mucha importancia, oyendo los informes y las observaciones que han llevado a su seno miembros distinguidos de la magistratura, siguiendo en esto el criterio experimental de traer a la reforma del código las observaciones más prácticas que en la vida ordinaria de los Tribunales se han presentado; también se han oído opiniones de profesores, que en la cátedra se ocupan de esta materia, de la evolución de las escuelas en los distintos congresos y estudios universitarios hechos en Europa y la producción científica de otros países.

Todo esto ha tenido en cuenta la Comisión en su nuevo estudio. Y, por otra parte, no ha podido hacerlo en el sentido de una reforma

general del código, tal como lo desearan algunas de las personas que han intervenido en estas conferencias. Esta reforma general del código no la podía hacer la comisión por dos razones principales: la primera, porque ya está aprobado en general el proyecto, en su estructura, en su método general, y no podía, pues, cambiarlo. Y en segundo lugar, no se cambia de raíz la estructura de un código por el solo afán de la novedad, o porque resulte que en otros países consulten mejor los principios generales de la materia; porque cada país tiene, además de su deber de seguir la corriente evolutiva de las ciencias, el deber de conservar en lo posible todo aquello que es obra de su propia experiencia.

El Código Penal, que es parte del derecho común, se ha venido formando así y no es posible, sin causar una grave perturbación, introducir un cambio de método o de concepto fundamental, siendo, además, posible dentro de esta estructura general incorporar las reformas más avanzadas que se creyeran aceptables, porque no es una estructura de hierro, que obligue a hacer lo que en el famoso mito griego de Procasto, de cortar lo que sobra y extender lo que falta. Los códigos, como la constitución, son elásticos en una cierta extensión, de manera que permiten introducir los resultados de la evolución y del progreso en la ciencia y la observación. En este sentido, no creo que la H. Cámara pudiera exigir a la comisión que aceptara la adopción de proyectos novísimos, como el recientemente presentado en el mes de febrero por la comisión reformadora de Italia, que preside el ilustre criminalista Ferri, porque este proyecto, como digo, cambia de una manera fundamental el método del código argentino; y aún así con algunos años de espera, podría adoptarse. En este momento no cree la comisión necesario este cambio fundamental a introducirse en el cuerpo del código.

Por estas consideraciones, la comisión no ha tomado en cuenta, en este sentido general, la necesidad que algunos ilustrados señores han sentido y así lo han manifestado a la comisión de adoptar este criterio, y entonces se ha limitado a escuchar y tomar en cuenta las reformas parciales, de detalle, que se han presentado en la estructura actual del código, tal como lo ha despachado la comisión de la Cámara de Diputados y lo ha reformado en detalle la comisión del Senado.

Entre los puntos que han sido motivo de reconsideración por parte de la comisión, debemos fijar algunos principales: el que se refiere a la pena de muerte, respecto al cual la

comisión que ha despachado el proyecto en discusión, optó por la eliminación creyendo colocarse en la corriente de ideas más humanitarias que dominan en todas partes. Han llegado al seno de la comisión diversas indicaciones en el sentido de la conveniencia de restablecer esa pena; pero ella no cree, como lo he manifestado al principio, deber entrar en este debate, que por sí sólo nos ocuparía muchos años, no digo ya muchas sesiones, pues es la cuestión más ardua que pueda discutirse en el terreno de la filosofía, de la jurisprudencia, de la sociología y de la ciencia, pues sería casi una revisión a todo el proceso de la civilización humana. No creo que esta cuestión deba ser discutida sino con el concepto que cada miembro de esta Cámara tiene formado de ella y prestar su voto en pro o en contra del asunto.

En cuanto al criterio de la comisión, yo no tengo autorización para manifestar sino mi propia opinión, que es de mantener mi decisión con mi voto y con mi firma puesta al pie del despacho, en el sentido de la supresión de la pena de muerte. Los demás miembros de la comisión, a su vez, manifestarán su propio parecer.

Si la H. Cámara cree conveniente restablecer la pena de muerte, aunque sea en la forma tan mitigada en cuanto a su aplicación, entonces se propondrán las cláusulas y artículos que ha debido suprimir la comisión relacionados con dicha pena. En todo caso fácilmente se podrá hacer ese reemplazo, adoptando alguno de los proyectos que han servido de base al despacho de la comisión.

La cuestión relativa a las faltas, que la comisión había propuesto como artículo 4.º, dejándola a la jurisdicción legislativa de las provincias, la comisión, escuchando observaciones de los que se han acercado a su seno, ha creído también que podría acceder a esta reforma, suprimiendo el artículo 4.º, que explícitamente reconoce a las provincias el derecho de legislar sobre la represión de las faltas, pudiendo las provincias imponer penas de prisión hasta tres años y de multas hasta cuatro mil pesos moneda nacional.

Esta cuestión de las faltas es también una cuestión general de mucha importancia; pero no de la gravedad que pudiera atribuirsele, exajerando sus consecuencias. Las provincias tienen, por la constitución, una zona de acción muy extensa, que se conoce con el nombre de "poder de policía" en los autores americanos, que es inherente a todo estado organizado, a toda sociedad política que tenga su gobierno propio; y como en la federación argentina la nación forma un estado y cada provincia forma otro estado, no se considera esta entidad

político-jurídica, si no tuviese una zona de jurisdicción penal suficiente para imponer, dentro de sus propios límites, el orden social. Esto no afecta, en manera alguna, a mi modo de ver, la facultad general de legislar sobre el Código Penal, atribuida al Congreso por el inciso 11 del artículo 67, de la Constitución, porque solamente se refiere al orden público, a la esfera de acción que entra dentro de este poder general de policía, que afecta, no solamente al orden público, propiamente dicho, sino al de la criminalidad, aún en su más baja escala, sino dentro de los otros órdenes que entran dentro del concepto "policía", como sería la parte moral, sanitaria, del trabajo, de las calles y de la vida conjunta en general.

Además del orden administrativo, propiamente en las leyes existe el de reglamentar. El poder de reglamentación es muy extenso y múltiple, y se ejerce, no solamente en las leyes, sino por el gobierno, por el Poder Ejecutivo, por las reparticiones públicas, por las corporaciones encargadas de ciertos servicios, etc.; es un poder tan extenso el de reglamentación, que es muy difícil comprender sus alcances en un Código Penal de la Nación, que debe tener en cuenta el régimen general de la penalidad, dentro del concepto del derecho común, que establece y tiene en cuenta la constitución en su inciso 11, en el que compete al Congreso la facultad de dictar el código general.

Por otra parte, la adopción del Código Penal no importa cercenar, en forma alguna, las atribuciones legítimas de las provincias para legislar dentro de su propio fuero en todo cuanto en el orden de policía no afecte la esfera de acción del poder federal. Es esta una cuestión muy difícil de determinar en una ley, primero, porque el alcance de esas leyes es indeterminado, y segundo, porque la multiplicidad de los hechos de la vida hace imposible la previsión de la legislación hasta un grado que pudiera comprender todos los casos posibles dentro de esa ley. Por eso es que, en la vida real de las naciones, siempre se dejan zonas comunes e indeterminadas, dentro de las cuales se desenvuelve la vida en todo su conjunto, imposible de prever. De ahí que crea, por mi parte, que la cuestión de las faltas, tal como se han presentado en este proyecto, no tiene la gravedad que pudiera tener si afrontáramos la tarea de redactar un libro donde se especificaran todas las faltas posibles dentro de esa zona de acción de la ley.

Creo que el Congreso cometería un error penetrando en este terreno de detalles y minucias, que lo induciría a confusiones. Por eso

creemos que es mucho más práctico, más experimental, más fácil para la evolución de la misma ciencia penal, dejar al libre desarrollo de las instituciones de la nación y de las provincias, esta faz de la penalidad, que, por otra parte, se encuentra legislada dentro de los mismos proyectos aplicables a todos los hechos que caigan bajo la jurisdicción de los jueces comunes de la capital, territorios o provincias.

Otra de las razones por qué la comisión no ha creído posible aceptar muchas de las novedades más interesantes que la ciencia moderna presenta a la legislación, es la dificultad, en nuestro país, de aplicar en la práctica las consecuencias de esas reformas; y, una de las cuestiones que me permito insinuar a la Cámara, es la relativa a las cárceles, es decir, al régimen penitenciario, en general.

Bien se sabe en qué condiciones están las cárceles en las provincias; y puedo afirmar que esta es una deuda seria que tiene la República contraída con sus propios habitantes. Algunas de las grandes reformas que deberán hacerse por algunas de las administraciones futuras, sería la de dotar a la República de los establecimientos penales que requiere, no digo ya el Código Penal por más avanzado que sea, sino la constitución, cuando reclama y exige que las cárceles deben ser para seguridad, y no para mortificación de los detenidos; que deben ser sanas y limpias; y al decir sanas, indica que deben ser establecimientos organizados de acuerdo con la ciencia sanitaria; y, los establecimientos de esta índole de muchas de las provincias, carecen en absoluto de estos requisitos elementales, siendo deficientes, a tal punto, que no reúnen las exigencias más indispensables de higiene y seguridad que indica la constitución.

Por eso es, señor Presidente, que muchas de las reformas que los miembros de la comisión, entre ellos el Senador que habla, habíamos pensado incluir, de acuerdo con lo que establece la ciencia moderna sociológica, resultan materialmente inadaptables en el estado actual de la Nación y menos en el sentido de su aplicación unas reformas generales para todas las provincias y territorios, y no siendo esto posible, es mejor limitarse a aquellos progresos y reformas prácticas que encuadren dentro del estado, desarrollo y progreso general del país.

Estas observaciones explicarán por qué la comisión no ha podido entrar en el examen de algunas de las reformas que le han sido insinuadas, y, además, debo hacer presente otra cuestión sobre el criterio general con que la comisión ha procedido. Se refiere a la mayor o menor amplitud de criterio que los jueces deben tener

para la aplicación de la ley. Algunos de los proyectos novísimos presentados en otros países, tienen el sistema del detalle en la enumeración, por ejemplo, en casos como el de las circunstancias agravantes y atenuantes.

Por lo que a mí respecta, creo que si alguien pudiera afirmar que la ciencia ha completado su evolución, tal vez pudiéramos aceptar que se llegará a especificar nominalmente todos los casos que puedan entrar dentro de un principio general, como el de las causas de agravación o atenuación de las penas. Se ha de introducirse en el juicio de delitos el elemento conciencia, el elemento psicológico; ¿quién puede ser el sabio capaz de enumerar todos los casos que puedan entrar dentro de la vida psicológica de un sujeto? Este es, pues, un postulado imposible de precisar y reducir a términos literales.

Por estas razones, señor Presidente, ya que muchas de las iniciativas de reformas propuestas a la comisión, no han podido ser aceptadas, y si se ha generalizado el concepto, comprendiendo la posibilidad de todos los casos insinuados y los que puedan presentarse en las prácticas de los juicios, dejando a la conciencia de los jueces las apreciaciones que las circunstancias sugieran.

No debe olvidarse, señor Presidente, que hoy los jueces no son, como en otros tiempos de nuestra vida institucional. Ya llevamos algunas decenas de vida universitaria; los jueces para llegar a desempeñar la magistratura, realizan estudios vastos, extensos; conocen las legislaciones de todo el mundo civilizado, más o menos, el que es más aplicado las conoce mejor, en la faz filosófica, bajo su faz jurídica e histórica, suficiente como para poder apreciar los hechos relativos a la vida del delito, al orden público y todo lo que se refiere al orden social. No se concibe un juez mecánico, un juez autómatas. Puesto que se les obliga a estudiar veinte años para poder llegar a desempeñar la magistratura, debemos suponer que en esa forma se encuentran capacitados para poder apreciar los caracteres particulares de cada caso, para poderlos encuadrar dentro de los términos de la ley.

No diré yo que lleguemos al modelo inglés del "Auto-juez" que por sí sólo juzga el proceso, lo forma, lo desenvuelve y lo falla; ojalá llegáramos a ese grado lo más pronto posible; pero mientras eso no sea así, y teniendo en cuenta nuestras condiciones de vida y nuestras genialidades y características, tenemos que sujetarnos a los moldes generales de la ley, y entonces los códigos son canales, más o menos amplios, donde se desenvuelve el pensa-

miento del legislador y se encauzan los hechos de la vida, hasta llegar a una etapa definitiva.

—Ocupa la presidencia el señor Vicepresidente senador señor Luis García.

Otra de las cuestiones que debo enunciar, antes de terminar estas palabras preliminares, es la relativa a la Ley 7029, llamada de Defensa Social.

Es esta una cuestión que, seguramente, apasiona y preocupa a la opinión pública, con razón; pero, puede estar tranquila esa opinión pública y todos cuantos de ella se preocupan, en lo que respecta a la cuestión que esta Ley reglamenta, al saber que la Comisión de Códigos, ni en su informe de 1919, ni en el informe actual, ha alterado de manera sensible, el régimen de dicha ley. Lo que ha hecho, — siguiendo el criterio que ha informado esta reforma, explicado con bastante amplitud por el decreto de 1904, que designó la Comisión Reformadora, — es simplificar lo más posible la legislación dispersa que ha complicado tanto el mecanismo de nuestros Tribunales, y que hoy implica un verdadero descubrimiento poder desenredar, — en medio del cúmulo de leyes especiales que se ha venido dictando — por la deficiencia de los códigos existentes, — cuál es el fuero que corresponda, y cuál la ley que ha de aplicarse en determinados casos.

Siguiendo este sistema de la simplificación, es que se ha incorporado al nuevo Código toda la parte penal de la Ley 7029, en cuanto coincide con el sistema general que lo informa, sin que con ello se introduzcan en su texto reformas fundamentales, quedando sólo en vigencia la parte reglamentaria de ella, que no puede ser materia de imposición penal.

Así, pues, bajo este punto de vista, puedo afirmar a la Cámara que debe estar tranquila, en cuanto pueda pensar que se han introducido reformas de gran importancia a esa ley especial.

Otra cuestión que también debo insinuar, porque he sido yo quien la planteara en el seno de la Comisión, — y para que el H. Senado vea cómo es difícil conseguir la aceptación y la consignación en un código de todas las ideas que a uno se le ocurran, por buenas que sean, — es la relativa a la legislación de imprenta.

Esta legislación es una de las más complicadas que hoy tenemos en el país. Tan es así, que la jurisprudencia de la Suprema Corte no ha podido todavía uniformarse en un sentido, invariable. Ella se ha complicado de una manera inexplicable.

Yo no he encontrado en todo el largo estudio que he consagrado a la Constitución de la República, una cláusula más clara y más simple, que la que existe en la constitución, relativa a la legislación de imprenta. En efecto, el artículo 32 dice, "que el Congreso federal no dictará leyes que restrinjan la libertad de imprenta, ni establezcan sobre ella la jurisdicción federal. De manera, señor Presidente, que no se ve por qué el Código Penal no ha de comprender también la legislación de imprenta, en cuanto se refiere a los delitos cometidos por la prensa en cualquiera de sus formas. Lo único que exige la constitución es que esos delitos no sean juzgados por jueces federales, sino por jueces del fuero común local, lo que se determina según los casos, lugares o personas.

Entonces, pues, si solamente ésta es la prescripción obligatoria de la constitución en lo relativo a la legislación sobre la imprenta, o sea con referencia al fuero en que ha de juzgarse, no se explica, — como ha observado muy bien, recientemente, el señor procurador de la Nación en un ilustrado dictamen, en un caso venido de la Provincia de Santa Fe, — cómo es que ha podido llegarse a esta diversidad de leyes en cada provincia, dictando cada una su ley penal de imprenta, quitando así al Congreso Nacional el fuero establecido por la constitución en el inciso 11, artículo 87, de dictar el Código Penal común para toda la Nación, siendo que la única restricción constitucional es la del fuero. Aún así, puede no haberlo hecho la Constitución respecto del fuero, no haber dicho nada más que lo que tiene consignado en el mismo inciso 11, del artículo 67, cuando dice que el Congreso debe dictar los códigos, "sin que tales códigos alteren las jurisdicciones locales", según así lo expresa.

De manera que, señor Presidente, sobre este punto la comisión está tácitamente conforme conmigo, que propuse esta cuestión, en la imposibilidad de alterar el estado actual de las cosas, de introducir en todas las provincias una perturbación, obligándolas a todas a reformar su legislación de imprenta. Se ha querido dejar constancia, en el cuerpo del Código, de los principios sobre esta materia, y no decir más, puesto que el régimen existente, si bien es aún del punto de vista doctrinario, y acaso práctico, peligroso para la libertad de la prensa, no es de una gravedad tan afigente, que no sea posible subsanar, por medio de reformas parciales; y esto no será difícil, pues, yo mismo, si es que alguna otra persona más competente no lo hace, me permitiré en las sesiones próximas, presentar un proyecto sobre esta materia, más

como una forma de estudio, que como una pretensión de convertirlo en una ley, dadas las dificultades que comprenden estas reformas fundamentales, que alteran de golpe un largo estado de cosas.

Por estas razones, que acabo de expresar en forma deshilvanada, y dado el estudio del Código Penal que se viene haciendo desde hace tantos años, la Comisión piensa que no debe de entrar en el estudio detallado, ni en la discusión particular de cada una de las reformas.

Con este motivo se ha presentado, pues, una planilla de modificaciones, que ya los señores senadores han tenido ocasión de conocer y compulsar con sus propios estudios. La Comisión ha pedido a todos los señores senadores, que tengan la deferencia de llevar a su seno las observaciones que creyeran convenientes presentar. Algunos de ellos han tenido la oportunidad de hacerlo; y la Comisión ha aceptado algunas de ellas dentro de los principios que informan el proyecto.

Y por último, señor Presidente, la Comisión se puede eximir del cargo de la discusión en detalle, porque esta reforma está abonada por estudios tan vastos, tan minuciosos, tan ilustrados, que casi sería una tarea imposible en una Cámara como ésta y en debate público, poder entrar en el examen de cada una de las reformas comparándolas y concordándolas con todas las demás disposiciones del código; porque todas las obras de esta naturaleza, y más, en códigos de derecho común, en todos los países del mundo, no se discuten en sesiones de las Cámaras, y por lo general son motivo de votos de confianza, no me refiero a la competencia de la actual Comisión, sino a todas las comisiones que en distintos parlamentos han tratado de estas materias. Y, entre nosotros mismos, salvo una que otra vez, los códigos no han sido discutidos, y hasta la ciencia experimental de la jurisprudencia aconseja dejar a la obra del tiempo y a la aplicación de los Tribunales, el ir indicando los defectos y las ventajas, y los puntos susceptibles de modificación, que las leyes de esta importancia puedan requerir.

En este concepto, señor Presidente, debo enumerar brevemente las fuentes que esta reforma tiene, para que se vea cómo a la comisión le sería imposible detenerse en sesión pública en la confrontación de cada una de las reformas, ni siquiera en la explicación de los puntos que han sido motivo de una modificación en el texto.

Los antecedentes de esta reforma, — y ya concluyo señor presidente, — datan desde la:

comisión redactora de 1904, que presentó su proyecto y su exposición de motivos, incorporado a este libro, que todos los señores senadores deben tener en su poder, en 1906, donde se explican las razones de todas las reformas introducidas al código vigente; la exposición de motivos de la comisión especial de legislación carcelaria de la Cámara de Diputados de 16 de junio de 1917, obra meritísima de uno de los legisladores y hombres públicos más ilustrados con que el país cuenta, el doctor D. Rodolfo Moreno; tiene todos los fundamentos y las explicaciones relativas a las reformas que esa Cámara introdujo en el proyecto de 1906. Consta en un libro voluminoso que desde hace tres años circula en la mesa de los hombres de estudio, y no podemos pensar que los señores senadores no lo conozcan.

Se han tenido en cuenta los congresos penitenciarios y de antropología penal, que se han celebrado en todo el mundo, desde que la reforma ha empezado a estudiarse y, en particular, el Congreso penitenciario argentino de 1914, al cual han concurrido todos los hombres de más estudio del país, y han presentado allí sus conclusiones, que las diversas comisiones que han tratado estas reformas las han incorporado, figurando citadas en sus partes prominentes en el informe de nuestra comisión del año 1919.

Se ha tenido en cuenta igualmente estudios especiales realizados en algunas instituciones libres argentinas por algunos juristas, jueces, profesores de nuestras universidades, como los doctores González Roura, Tomás Jofré, Arturo Seeber, Juan P. Ramos, este último catedrático de derecho penal en la Facultad de derecho de Buenos Aires, quien, en su curso de seminario, ha presentado un magnífico trabajo de análisis, de exégesis del Código Penal; es el primer tomo de una obra más vasta, y en él incluye el proyecto del nuevo código italiano, a que me he referido antes; trabajo valiosísimo lleno de interés, trabajo de cátedra, pero que, al tenerlo en cuenta la comisión vió en él, el inconveniente, para ser adoptado en su totalidad, de que introducía reformas fundamentales desde que recomendaba en primer lugar, al código italiano, a que he hecho referencia, el que no ha sido todavía tratado en aquel país, y que altera el fondo de la legislación y del sistema. Sin embargo, se han adoptado varias de las acertadas indicaciones de este profesor.

Ha tenido también en cuenta, y figura en el libro publicado por el Senado, con el despacho de la comisión, los estudios de nuestro colega, fallecido, el doctor Angel D. Rojas, quien,

como miembro de la comisión conjunta de derecho penal y militar, había producido un informe erudito, lleno de interés y de ciencia, explicando las modificaciones que proponía al despacho de la Cámara de Diputados. Esa reforma, en su parte más importante, se refiere al artículo 1.º, en cuanto define el alcance jurisdiccional del Código Penal. Una de las partes más importantes de este trabajo es la relativa a los fundamentos porque se ha simplificado el artículo 1.º en la forma que se presenta.

Por estas razones, y lamentando que mi deficiencia y mi falta de especialidad en esta materia, me impida ser más convincente, pero de acuerdo con el espíritu que ha guiado a la comisión y que impera en todo los países donde se tratan códigos, cree la comisión poder pedir a la H. Cámara que se resuelva a no hacer un debate minucioso, y de detalle excesivo, en las reformas, porque sería materialmente imposible conducirlo debidamente; yo, por mi parte, me declararía incapaz de afrontarlo, no así de hacer ese estudio en el silencio de mi gabinete de trabajo, porque esta clase de estudios no se pueden hacer en asamblea y en público, sin exponerse a las mayores confusiones y caer en errores, en vez de aciertos.

Muchas otras cosas podría haber dicho especialmente en lo relativo a la relación que esta legislación tiene con la constitución misma en la que con toda claridad están expresadas y resueltas varias cosas de penalidades y juicios. — lo cual hace innecesario reproducirlas en el Código General.

En fin, después de lo dicho, creo que puedo libertar a la Cámara de la molestia de escuchar un informe más extenso, y le pediría que se limitara, si así lo cree conveniente, a dar un voto de confianza, no diré a la comisión que sólo sería una de las partes que pudiera aprovechar de esta benevolencia de la Cámara, sino a las personas que desde 1906 se vienen ocupando de este asunto y a las sabias comisiones formadas por el elemento más capaz que tiene el país en esta materia; sería un debido homenaje al saber, al patriotismo de todos ellos; y, por eso, la comisión se atrevería a esperar del Senado que dé este voto de confianza, aunque más no sea que como un estímulo y además por la urgencia que esta reforma reclama, ya que no es posible postergarla por más tiempo, y debe devolverse a la otra Cámara, la cual podrá modificar o aprobar nuestra propia decisión. Y hago esta observación final: que para dar una estructura definitiva al Código Penal, después de esta reforma, sería necesario que la Cámara, en cuyo recinto termine su sanción, designe una comisión espe-

cial para que haga la redacción definitiva del mismo, de acuerdo con las reformas sancionadas, o sino, que se encargue a una persona o, junta especial de fuera de su recinto, — aunque no creo que haya necesidad de eso — para hacer una redacción concordante como se hace en todos los países del mundo civilizado, para que este código resulte con el conjunto de disposiciones sancionadas, redactado en forma coherente, armónica y correcta.

No tengo más que agregar.

Sr. Presidente (García). — Se va a leer el artículo 1.º.

Sr. Llanos. — Me parece que ha planteado una cuestión previa el señor Senador González: si el H. Senado va a votar el despacho de la comisión o si va a discutir artículo por artículo.

No sé si habré interpretado mal al señor Senador por La Rioja.

Sr. González. — No he hecho una proposición; he expresado un anhelo, un deseo en obsequio a la sanción del Código Penal. Entiendo que lo que corresponde, para mayor brevedad y sencillez, es tratar las reformas votándolas en la forma propuesta por la comisión, no solamente en el despacho existente, sino las propuestas en la planilla de modificaciones que acaba de presentarse. Eso serviría de base al debate.

Sr. Presidente (García). — Se va a leer el artículo 1.º

Sr. Melo. — Pido la palabra.

Hago indicación de que se lea el número de cada artículo y se dé por aprobado si no se observa.

—Se lee y aprueba el artículo 1.º.

—Se aprueban asimismo los siguientes:

Artículo 2.º. — Si la ley vigente al tiempo de cometerse el delito fuere distinta de la que exista al pronunciarse el fallo o en el tiempo intermedio, se aplicará siempre la más benigna.

Si durante la condena se dictare una ley más benigna, la pena se limitará a la establecida por esa ley.

En todos los casos del presente artículo, los efectos de la nueva ley se operarán de pleno derecho.

En el cómputo de la prisión preventiva se observará separadamente la ley más favorable al procesado.

Artículo 3.º. — Las disposiciones generales del presente código se aplicarán a todos los delitos previstos por leyes especiales.

—Al leerse el artículo 4.º suprimido, dice el

Sr. Llanos. — Pido la palabra.

Yo he sido uno de los senadores que objetó el artículo 4.º del proyecto, viendo, en él, un peligro al conceder semejantes facultades

a las legislaturas de las provincias. Entiendo que el Congreso debe legislar sobre las faltas de carácter general y, en esto, está de acuerdo el proyecto de Código Penal italiano, que ha sido recordado tantas veces en esta Cámara.

En la página 3 del informe con el que acompaña al proyecto, su miembro informante, el periodista Jevri, dice que, que ahora, la comisión, presenta el proyecto de Código Penal, reservándose, para otra oportunidad, la legislación sobre fallos.

Quiero que quede establecido que, al suprimirse el artículo 4.º, no se entienda, en manera alguna, que el Congreso no dictará leyes represivas sobre las faltas de carácter general.

Entiendo que ha sido aprobado el artículo 2.º que dice en su primera parte: "si durante la condena". Me parece incorrecta la forma. Creo que debe decirse: "si después de la condena". Aquí se emplea el término "durante la condena" como sinónimo del momento en que está sufriendo la pena el procesado. Si después de la condena se dictara una ley más benigna... Esta debe ser la redacción del artículo.

Sr. Melo. — La observación que hace el señor senador es en el segundo apartado del artículo 2.º.

Sr. González. — Supongo que el sentido del inciso es ése: durante el tiempo en que se cumpla la condena.

Sr. Llanos. — Mientras cumpla la pena. Si después de la condena se dictara una ley más benigna... debe decir.

Sr. González. — También nos expondríamos a otro distinguo, si después de cumplida la condena; por eso dice durante la condena, mientras rija la condena.

Sr. Llanos. — Cuando cumple la condena, ya no hay nada que hacer.

Si el alcance del artículo fuera ese, podría quedar en los mismos términos.

Sr. González. — No puede ser otro.

—Sin observación se vota el artículo y se aprueba.

Sr. Melo. — Pido la palabra.

Voy a hacer una indicación con respecto al artículo 5.º, que también lo haga comprensivo.

Sr. Linares. — Si me permite? Iba a hacer una observación al artículo 4.º.

Sr. Melo. — Con el mayor gusto.

Sr. Linares. — Yo deseaba saber cómo queda



el artículo 40., y si el señor senador por Santiago, lo acepta.

**Sr. Llanos.**—Ha quedado suprimido.

**Sr. Linares.** — ¿Pero el señor senador lo acepta?

**Sr. Llanos.**—Pero con el alcance que yo le atribuyo.

**Sr. Linares.** — Desearía saber si la Comisión de Códigos, ha aceptado la interpretación que el señor senador le ha dado, en el sentido de ser facultativo del congreso legislar sobre las faltas y poder dictar, en adelante, una ley especial a este respecto, porque la supresión podría entenderse de otra manera, es decir, que el congreso se declara incompetente para legislar sobre faltas y que deja esa legislación exclusivamente librada a las legislaturas locales de provincias.

**Sr. Garro.**—En este proyecto se dice: la represión de las faltas, corresponde a las provincias; entonces si la comisión ha dicho que esta facultad corresponde a las provincias, ¿cómo le va a poner límites a la represión que ellas puedan hacer?

**Sr. Linares.**—Entiendo que a este respecto no hay uniformidad de opiniones; en mi concepto, la comisión entiende que ésta puede ser una legislación aparte; pero siempre de la incumbencia del Congreso nacional, tratándose de imponer penas y que será materia de una ley especial. Me parece haberle entendido así al señor presidente de la comisión.

**Sr. González.** — Pido la palabra.

El Congreso no puede renunciar a su facultad de dictar las leyes penales que crea conveniente incorporar al Código Penal; pero, llamo la atención de los señores senadores sobre la distinta calidad de esta legislación. El Congreso dicta el Código Penal para toda la Nación; pero no puede desconocer que existe, como he dicho en las breves palabras que pronuncié antes, que la sola condición de estado le da una jurisdicción para legislar dentro de lo que se llama poder de policía, acción policial, y es muy extenso este poder dentro de la vida propia de los estados, y la vida limitativa de este poder la establece el Código Penal; de manera que, cuando el Congreso crea conveniente dictar una ley general la dictará, pero me parece innecesario hacerlo ahora, dado que los principios generales no se cambian, no se alteran con eliminar esta legislación de detalle, dejando en libertad el desarrollo de la vida social de los estados provinciales, para que estos legislen particularmente sobre los casos que puedan producirse en la evolución que naturalmente tienen estas cosas. Lo peligroso era, naturalmente,

como observó muy bien el señor Senador por Santiago del Estero, la cláusula expresa autorizando esta legislación, porque eso bien se comprende que podía dar lugar a muchos abusos y excesos de legislaciones que complicaran naturalmente los procesos, y es preferible dejar así a la libertad espontánea de cada provincia y de los estados nacionales legislar cuando los casos se presenten y legislar más bien experimentalmente, que anticipándose a los sucesos, porque es imposible.

Por estas razones, creo que se llegará mejor a este resultado suprimiendo la autorización expresa del artículo 40. y dejar lo demás a las legislaciones especiales y a la multiplicidad de leyes que se dicten sobre distintas materias, sin que esto importe invadir la jurisdicción del Código Penal y de la Justicia Federal, la cual establecerá, por los medios fijados en las leyes de procedimientos la propia esfera de cada uno.

**Sr. Linares.** — Yo estoy conforme, señor Presidente, precisamente lo que deseaba era que la Comisión de Códigos precisara bien el espíritu con que se hace esta supresión. Con las palabras que acaba de pronunciar el señor Senador estoy satisfecho.

**Sr. Presidente (García).** — Aprobado.

—Se lee:

Artículo 5°. — Las penas que este código establece son las siguientes: reclusión, prisión, multa e inhabilitación.

Artículo 6°. — La pena de reclusión, perpetua o temporal, se cumplirá con trabajo obligatorio en los establecimientos destinados al efecto. Los reclusos podrán ser empleados en obras públicas de cualquier clase con tal que no fueren contratadas por particulares.

Artículo 7°. — Los hombres débiles o enfermos y los mayores de sesenta años que merecieren reclusión, sufrirán la condena en prisión.

Artículo 8°. — Los menores de edad y las mujeres sufrirán las condenas que les correspondan en establecimientos especiales.

**Sr. Melo.** — Pido la palabra.

Para hacer una indicación que se refiere a la vez a los artículos 50. y 80. del proyecto. El artículo 50. enumera las penas en la siguiente forma: "reclusión, prisión, multa e inhabilitación".

Mi indicación en este artículo es la de que se agregue en la enumeración, en primer término, la pena de muerte. Con relación al artículo 80., cuya primera parte dice, que se aplicará reclusión perpetua en los casos que enumera mi indicación; consiste en redactar el primer apartado en la siguiente forma: "Se aplicará pena de muerte, reclusión perpetua o prisión perpetua".

Este artículo 80. se refiere a los casos más graves de homicidios calificados o sean según lo dice el inciso primero, al que matare a su ascendiente, descendiente o cónyuge, sabiendo que lo son; el 20. al que matare a otro con alevosía o ensañamiento por precio, promesa remuneratoria, impulso de perversidad brutal o por veneno, incendio, inundación, descarrilamiento, explosión o cualquier otro medio capaz de causar grandes estragos; y el inciso 30. "al que matare a otro para preparar, facilitar, consumar, ocultar otro delito, o para asegurar su resultado, la impunidad para sí, o sus cooperadores, o por no haber obtenido el resultado que se propuso al intentar el otro hecho punible".

Basta enunciar los casos que comprende el artículo 80. para dejar patentizada la gravedad, y con ello fundada mi indicación, que, por otra parte, ha sido llevada ya al seno de la comisión por los magistrados y profesores que ella tuvo oportunidad de escuchar.

Encuadra la incorporación de la pena de muerte en la forma que propongo, con el mismo criterio que la comisión prestigia como el más moderno, o sea la individualización y su adaptación al delincuente más que al delito, dejando amplia facultad a los jueces para esa adaptación de acuerdo con el peligro y calidades de temibilidad del delincuente.

Sería de mal gusto entrar en la disertación que la comisión ha eludido elegantemente en su informe y que el señor miembro informante de la misma, en su exposición, no quiso tampoco desarrollar, con relación a los argumentos en pro y en contra de la pena de muerte. Son ellos demasiado conocidos y sería ofender la ilustración de los señores senadores pretender repetirlos. Recordaré solamente, que las naciones que se señalan por su cultura tienen la pena de muerte incorporada a su legislación. Así la vemos en el Código Penal alemán vigente y en el proyecto de nuevo código; existe en Inglaterra y en la mayoría de los Estados de la Unión Americana. De manera que nosotros no colocaremos nuestra ley en un pie de inferioridad, comparada con las otras de las naciones más adelantadas, sino que al sancionar la pena de muerte concordaríamos nuestra legislación con las de esas naciones que acabo de nombrar.

La comisión invocaba como antecedente de la supresión, que uno de los miembros de la comisión nombrada en 1904, que redactó el proyecto de código de 1906, el doctor Rodolfo Rivarola, de indiscutible versación, había manifestado su opinión adversa a la inclusión

de dicha pena; pero debo hacer notar que la autorizada opinión del doctor Rivarola, no fue la que predominó en el proyecto de 1906, sino la opuesta sustentada por calificados profesores de derecho, como Norberto Piñero y Moyano Gacitúa; sociólogos, como Ramos Mejía y experimentados magistrados como Diego Saavedra, manteniendo la mayoría de esa comisión la pena de muerte. Por eso en el proyecto que se remitiera en 1906 por el Poder Ejecutivo se incluía la pena de muerte.

Es, pues, por estas breves consideraciones, que voy a pedir al Senado que, atendiendo a tan autorizadas opiniones, como las que ha escuchado la comisión de magistrados y profesores y a los antecedentes invocados, acepte la incorporación de la pena de muerte, y en el artículo 80. la incorpore con la reclusión perpetua y prisión perpetua.

Son estas las indicaciones que entrego al Honorable Senado.

**Sr. Llanos.** — ¿No incluiría también el señor Senador la pena de detención?

**Sr. Melo.** — Si el señor Senador la propone, no tendría inconveniente.

**Sr. Llanos.** — Porque el artículo 70. habla también de detenidos.

**Sr. Presidente (García).** — En discusión. Si no se hace uso de la palabra se va a votar.

**Sr. Melo.** — Correspondería votar primero, si se incluye la pena de muerte en el artículo 50., y después pronunciarse sobre la pena de detención que ha indicado el señor Senador.

**Sr. Presidente (García).** — Se va a votar, si se incluye la pena de muerte en el artículo 50., de acuerdo con la proposición del señor Senador por Entre Ríos, doctor Melo.

—Se vota y resulta afirmativa.

**Sr. Zabala.** — Ahora debe votarse la indicación del señor Senador por Santiago del Estero.

**Sr. Presidente (García).** — Entiendo que estaba aceptada por el señor Senador Melo.

**Sr. Zabala.** — Debe votarse separadamente.

**Sr. Llanos.** — Pido la palabra.

Para hacer esta indicación, he tenido presente que entre la comisión de un delito y la fecha en que resulta condenada una persona, media una especie de tiempo que no está prevista por el proyecto de Código Penal y es una situación de la que no puede prescindirse. Una persona detenida, cualquiera que sea la naturaleza del hecho que se le imputa, desde el primer momento, no se le puede condenar u obligar a trabajos de ninguna clase. Ese tiempo que sufre preventivamente debe ser computado, de

acuerdo con la escala que tendrá que fijar alguna disposición de la ley, a los efectos del cumplimiento de la condena, y así no tendremos este hecho inaudito, que una persona que ha sufrido más de dos años de prisión preventiva tenga que sufrir el tercer año de prisión, de acuerdo con el concepto que le da el Código Penal, no obstante de haber sido condenado a un año de prisión.

El caso típico es el del penado García. Este señor ha sido condenado a dos años de prisión, y sin embargo se le obliga a sufrir el tercer año de ella.

Esa época de prisión preventiva, que no es la prisión-condena, es necesario establecerla en la ley y fijarle la forma cómo ha de computarse para el tiempo de la condena.

En estas consideraciones se funda mi indicación.

**Sr. Melo.** — Pido la palabra.

Entonces propondría al señor Senador, que ampliara la leyenda de este artículo en los siguientes términos: "Las penas o restricciones a la libertad que éste código autoriza, son las siguientes, etc., etc.". Y entonces me parecería procedente la enmienda del señor Senador que ha querido contemplar esa situación especialmente de la persona que sufre detención mientras se instruye el proceso.

Eso no es una pena, en realidad es una restricción a la libertad, y con lo indicado se llena el propósito del señor senador, poniendo en la leyenda del artículo lo que acabo de expresar.

**Sr. Llanos.** — No hay inconveniente, porque ese es mi propósito.

**Sr. Gallo.** — Pido la palabra.

Me permito llamar la atención del señor senador sobre la significación que puede revestir el voto que se pronuncie en esta proposición, aparentemente sin importancia. Ella revelará, desde luego, el peligro que tiene la discusión de un código de esta naturaleza, cuando se hace artículo por artículo, lo que no es juicioso, porque los códigos se consideran siempre de acuerdo con los estudios de las personas encargadas de proyectarlos. La comisión, en el informe general escrito que acompaña el despacho, ha explicado las razones por las cuales se ha limitado el número de las penas, dando un margen considerable de amplitud al criterio judicial para aplicarlo dentro de un minimum y un maximum establecido.

La pena de detención no está enunciada en el artículo 6o. que enumera cuales son las penas, que en virtud de este código, han de

aplicarse, y, en la parte correspondiente del código, no está determinado tampoco a qué delito ha de aplicarse la pena de detención, de tal manera que la incorporación en este artículo 6o., de una nueva pena, cuya sanción o cuya aplicación no esté determinada en el resto del código, va a traer una serie de complicaciones, porque habrá que establecer, más adelante, en qué consistirá esa pena y a qué delitos habrá de aplicarse.

Dado el margen considerable que para la aplicación de la pena de prisión establece el código, considero que no tiene objeto la enunciación o la creación de esta nueva pena de detención, y que, en cambio, va a exponer la consideración de este código a una serie de peligros e inconvenientes susceptibles de malograr todas las demás reformas.

Dejo, con estas breves palabras, consignada la oposición de la comisión a la proposición hecha por el señor Senador por Santiago del Estero.

**Sr. Llanos.** — Yo no he presentado el caso como nueva pena, sino como un estado en que se encuentra el procesado desde el día de la iniciación del juicio hasta el día de la condena, a objeto de que se les compute ese término con relación a la pena que se le aplicará.

**Sr. Linares.** — Yo creo que la situación que enuncia el señor Senador por Santiago del Estero, está contemplada en el mismo proyecto de reformas que discutimos, en el artículo 24, cuando dice: la prisión preventiva...

**Sr. Llanos.** — Está suprimido ese artículo en la planilla de reformas.

**Sr. Linares.** — Yo creo que no, señor senador.

**Sr. Llanos.** — En la planilla de reformas se suprime el artículo 24. Precisamente esa supresión es la que me ha inducido a presentar esta observación.

**Sr. Linares.** — Efectivamente; pero yo no conozco las razones que se habrán tenido para esa supresión, por que evidentemente hay que contemplar la situación de los detenidos, de los que han sufrido prisión preventiva, con relación a las penas establecidas, con relación a las penas de reclusión y a las de prisión. Debería entonces restablecerse ese artículo.

**Sr. Zabala.** — Pero no contempla el caso, por que se refiere al estado del juicio, que se califica con el nombre de detención, y el artículo 24, se refiere a prisión preventiva.

**Sr. Linares.** — Me parece que el caso es el mismo. El reo no está, en realidad, más que detenido, no se le puede imponer trabajo de ninguna clase. De manera que el artículo 24, consulta bien la situación y la resuelve en la

forma en que estaba redactado. Creo que convendría restablecerlo.

Como decía, yo no conozco las razones que habrá tenido la comisión para aconsejar esta supresión, creo que debe haber tenido alguna, sin duda. Pero considero que debería restablecerse este artículo, porque es de estricta necesidad.

**Sr. Llanos.** — Si la restricción de la libertad que sufre el procesado, desde el día que cae bajo la acción de la justicia, hasta el día de la condena o un día de esa detención o prisión preventiva se computaran por un día de prisión, que lleve consigo la de obligación de trabajo, estaría de perfecto acuerdo y no habría necesidad de establecerla con la denominación de detención, pero de lo contrario es indispensable.

**Sr. Linares.** — Podría ponerse: "la prisión preventiva o detención que hubiera sufrido el condenado, se computará así" etc. Entonces estaría salvado.

**Sr. Gallo.** — La cuestión debía hacerse alrededor del artículo 24.

**Sr. Melo.** — Entonces debe votarse mi indicación con relación al artículo 8o. que es complementaria de la que se ha votado, para no alterar la discusión. En el artículo 5o. se ha votado la incorporación de la pena de muerte, y corresponde ahora establecer en que casos se aplicaría. Mi indicación se refiere al artículo 8o. y la he concretado en los siguientes términos: "Se aplicará la pena de muerte, reclusión perpetua o prisión perpetua; primero: al que matara a sus ascendientes, descendientes o cónyuge, sabiendo que lo son", o sea a los casos de los tres incisos de ese artículo que constituyen los delitos más graves.

**Sr. Presidente (García).** — Se va a votar la indicación del señor Senador Melo.

—Se vota y resulta afirmativa.

**Sr. González.** — Pido la palabra.

Dando como un hecho la inclusión de la pena de muerte, creo que el senado debe completar los artículos que faltan que son correlativos a esta inclusión. Y a ese respecto sería necesario incluir — no porque los acepte, sino como una consecuencia del voto del Senado, — los artículos 5 al 10 que legislan al respecto la manera como debe ser aplicada la pena de muerte.

**Sr. Melo.** — No tengo ningún inconveniente en que se incorporen esos artículos, pero no los había propuesto, dado que en el Código de Procedimientos en lo Criminal figura el artículo 11, que establece que la pena de muerte no puede imponerse sino por unanimidad de votos cuando el fallo fuera revocatorio del

de primera instancia y además en ese mismo código figuran los artículos 559 y 560 que reglamentan la ejecución de la pena de muerte. Pero no tengo inconveniente en que se incluyan las disposiciones que propone el señor senador, porque constituirán normas uniformes para toda la República y quedarían incorporadas al Código Penal, como lo proponía la comisión del año 1906.

**Sr. Llanos.** — Como es una cuestión tan importante, es mejor que figure en el Código.

**Sr. Melo.** — Yo no tengo ningún inconveniente.

**Sr. Presidente (García).** — Se va a votar si se incorporan los artículos del 5o. al 10, suprimidos por la comisión.

**Sr. Melo.** — Los artículos 5o. al 10, del proyecto de 1906, dicen:

Art. 5o. — No se impondrá pena de muerte cuando el hecho o sus circunstancias calificativas resulten probadas sólo por presunciones o por confesión.

Art. 6o. — Sólo podrá aplicarse la pena de muerte cuando concurran las siguientes circunstancias: primero, que la causa haya sido vista en todos los juicios que establezca la respectiva organización judicial; segundo, que en todas las instancias se haya decidido la imposición de aquella pena; tercero, que haya habido unanimidad de votos y tribunal pleno en los tribunales colegiados; cuarto, que el reo haya sido oído personalmente en audiencia por todos los jueces y tribunales que dictaren sentencia.

Art. 7o. — No se impondrá la pena de muerte a las mujeres, a los menores de edad y a los mayores de 70 años.

Art. 8o. La ejecución de la pena de muerte tendrá lugar dentro del establecimiento en que se encuentre el condenado, quien será asistido por el sacerdote o ministro del culto cuyo auxilio hubiera solicitado o aceptado.

El juez de la causa hará constar la ejecución de la pena en un acta que se unirá al proceso. Esta acta y la sentencia se darán a la publicidad.

Art. 9o. — La ejecución de la pena de muerte tendrá lugar al día siguiente de la notificación de la sentencia irrevocable.

La notificación no podrá hacerse en vísperas de domingo ni de fiesta religiosa o nacional.

Art. 10. — El cadáver del ejecutado será entregado a sus parientes dentro del segundo grado si lo solicitaren al juez de la causa.

—Se vota y resulta afirmativa.

**Sr. Esteves.** — Pido la palabra.

Me voy a permitir hacer una pregunta a los señores miembros que han redactado las modificaciones al Código.

Sucede con frecuencia, en el interior sobre todo, que las autoridades privan de la libertad a una o varias personas y en lugar de seguir el juicio, atenderlo y substanciarlo, en poco tiempo, permanece estacionario por desidia, por negligencia, dos, tres, cuatro, o más.

años, y al fin, tomando en cuenta la situación de esas personas, las absuelven de toda culpa y cargo. ¿Qué pena pone el Código para los señores jueces que no saben cumplir con su deber, a su debido tiempo? Porque me parece que alguna pena han de merecer.

**Sr. Llanos.** — Más adelante se encuentran disposiciones que prevén ese caso, señor senador.

**Sr. Presidente (García).** — Se han retirado dos señores senadores y la Cámara ha quedado sin número, y no se puede votar.

**Sr. Llanos.**—Se les puede llamar.

**Sr. Presidente (García).**— Se han retirado

de la casa. Invito a la Cámara a pasar a cuarto intermedio, hasta el jueves próximo.

**Sr. Llanos.**—Pido que se invite a concurrir a los senadores que faltan.

**Sr. Presidente (García).** — No es posible, porque se han retirado de la casa.

Queda levantada la sesión.

—Eran las 13 y 7.

A. VIDAL DOMINGUEZ,  
*Subdirector de Taquígrafos.*